

Santiago, tres de marzo de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

En esta causa RUC N°1910053180-4 RIT N° 22-2021, del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Concepción, por sentencia de veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, se condenó a Francisco Andrés Reyes Reyes, en calidad de autor del delito consumado de receptación, cometido el día 24 de octubre del año 2019, a la pena temporal de quinientos cuarenta y un (541) días de presidio menor en su grado medio, accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de una multa de cinco (5) unidades tributarias mensuales. Se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena corporal impuesta, reconociéndole los abonos que precisó. La sentencia fue impugnada de nulidad por la defensa de Francisco Andrés Reyes Reyes, recurso que se conoció en la audiencia pública del día nueve de febrero pasado, incorporándose el acta que da cuenta de su realización y se determinó la fecha de lectura de la sentencia para el día de hoy.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurso deducido por la defensa de Francisco Andrés Reyes Reyes, invoca en forma principal la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución Política de la República o por los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en relación con los artículos 19 N° 3, inciso sexto, de la carta fundamental, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, denunciando la vulneración a las normas del debido proceso, el derecho a la libertad personal y a la intimidad, pues la detención del acusado



se verificó fuera de los presupuestos establecidos en el artículo 129 del Código Procesal Penal, que contempla las excepcionales facultades de los civiles al momento de la detención de un imputado, con la consecuente prohibición de desarrollar diligencias investigativas.

Desarrollando los motivos de su agravio señala que cuando su representado se encontraba durmiendo al interior de la casa de un amigo apodado “El Laucha”, al inmueble ingresaron personas desconocidas sin orden judicial ni permiso del dueño, quienes lo detienen, lo sacan en contra su voluntad a la calle donde primero lo golpean, luego lo amarran y posteriormente lo entregan a Carabineros. Precisa que entre las personas que ingresaron al domicilio se encontraban la víctima Herman Jara y el testigo Maycol Jara, quienes realizaron pesquisas para la ubicación de la persona que había sido sorprendida en posesión de las especies, lo que vulnera la regla del debido proceso y convierte la obtención probatoria en ilícita.

Concluye solicitando la nulidad del juicio y de la sentencia, dada la transcendencia que estas infracciones han tenido en la especie, disponiéndose la exclusión de la prueba que detalla y que se remitan los antecedentes al tribunal no inhabilitado que corresponda, para que disponga la realización de un nuevo juicio oral.

**SEGUNDO:** Que en subsidio de la causal anterior, invoca la prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, al haberse infringido la letra c) del artículo 342 del mismo cuerpo legal, en conjunto con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, por haber el tribunal incurrido en una ausencia total de fundamentación, infringiéndose así, el principio lógico de la razón suficiente y específicamente el de corroboración. En efecto, el tribunal para tener por acreditado el tipo penal de receptación, valoró únicamente el

testimonio de Maycol Jara Poblete, no obstante que su representado niega los hechos.

En virtud de lo anterior solicitó que se invalide la sentencia y el juicio, se determine el estado en que hubiere de quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los autos a tribunal no inhabilitado que correspondiere, para que disponga la realización de un nuevo juicio oral.

**TERCERO:** Que en lo que concierne a los hechos que sustentaron la acusación del Ministerio Público, el basamento séptimo de la resolución reprobada tuvo por acreditado que: “el día 24 de octubre de 2019, siendo aproximadamente entre las 8:30 y las 10:30 horas de la mañana, en circunstancias que la víctima Herman Alonso Jara Manríquez, dejó momentáneamente a solas su casa habitación, ubicada en pasaje Los Copihues N° 1067, de la Población Hernán Mosso, de la comuna de Santa Juana, se produjo el ingreso por la parte posterior de dicho inmueble, para lo cual se traspasó el cerco perimetral posterior que colinda con un cerro, y se forzó luego una puerta trasera para ingresar a la casa habitación antes señalada, sustrayéndose desde el interior diversas especies, tales como botellas de pisco y de ron, además de bebidas energéticas, un pack de cerveza y una caja fuerte de color gris. Luego, siendo aproximadamente entre las 10:30 horas y las 11:00 de la mañana, Francisco Andrés Reyes Reyes fue sorprendido en el cerro que está en la parte posterior del inmueble afectado, a una distancia de alrededor de cien metros de este último lugar, manteniendo en su poder una caja fuerte y otras especies que habían sido sustraídas desde la vivienda antes señalada, y lo que hacía conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de las mismas”.



Estos hechos fueron calificados por los magistrados como un delito consumado de receptación, de acuerdo con lo descrito en el artículo 456 bis A del Código Penal.

**CUARTO:** Que, en relación a la causal de invalidación principal esgrimida, como se desprende del recurso, las afectaciones en que la defensa fundamentó su reclamo se originarían con motivo de determinadas diligencias que habría realizado la víctima para individualizar al acusado, la inexistencia de una situación de flagrancia que permitiera su detención y las agresiones ilegítimas que habría sufrido.

**QUINTO:** Que, en torno a la existencia de diligencias respecto de la persona del imputado realizadas por la víctima, consistentes en el acceso sin el consentimiento del acusado a su cuenta de Facebook para obtener su individualización, generando con ello elementos probatorios ilegales, cabe tener presente que en el uso de la red social Facebook resulta ser un hecho expandido las características básicas de su funcionamiento, entre ellas, las diversas configuraciones de privacidad para la información que los usuarios suben a sus cuentas personales, cuya visibilidad de contenido estará determinado por el nivel que haya decidido el propio usuario. Uno de estos niveles es el “público”, que se caracteriza porque cualquiera puede acceder a su contenido, a diferencia del que se publica de manera restringida que podrá ser conocido únicamente por determinadas personas. Así, cuando el material es incorporado a esta plataforma bajo un perfil público, el usuario acepta que su contenido pueda llegar a quienquiera que acceda a Internet. Por ello, el que difunde la información no puede tener una razonable expectativa sobre la privacidad de su tenor cuando lo realizó bajo el referido perfil público. En consecuencia, tal como ya ha señalado esta Corte, las diligencias realizadas por el denunciante no han podido vulnerar el derecho a la intimidad del

condenado, porque en las condiciones anotadas, el contenido que el recurrente había subido a Facebook no puede ser considerado como “privado” y descarta su protección por la garantía del artículo 19 N°5 de la Constitución Política de la República (SCS Rol N°1067-18 de 28 de febrero de 2018 y N° 148-19 13 de marzo de 2019).

**SEXTO:** Que, en relación al segundo segmento de la causal principal del recurso de nulidad impetrado, por el cual se denuncian actuaciones realizadas por particulares fuera de las hipótesis establecidas por la ley, cabe recordar que el artículo 130 del Código Procesal Penal autoriza la detención por cualquier persona en caso de flagrancia, debiendo entenderse que se encuentra en tal situación aquél que actualmente se encuentra cometiendo un delito, el que acabare de cometerlo, el que huyere del lugar de comisión del mismo y fuere designado por el ofendido u otra persona como su autor o cómplice, el que en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar de su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo, y el que las víctimas de un delito que reclamen auxilio o testigos presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato. Esa misma disposición define como tiempo intermedio para los efectos señalados en las letras d) y e), el que transcurre entre el hecho y la captura del sujeto, siempre que no alcance más de doce horas.

**SÉPTIMO:** Que, acorde con lo señalado precedentemente, los antecedentes que arroja la causa y lo expuesto por los intervinientes, no hay duda alguna que la actuación que se critica se inserta en el marco de una detención en situación de flagrancia.

La detención por civiles a quien se sorprendiere en delito flagrante se encuentra expresamente autorizada por el artículo 129 del Código Procesal Penal, con la única limitación de entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al Ministerio Público o a la autoridad judicial más próxima.

En este sentido el razonamiento sexto del fallo recurrido tuvo por establecido que “el día 24 de octubre del año 2019, entre las 08:30 a 10:30 horas, desconocidos ingresaron a la casa habitación, ubicada en pasaje Los Copihues N° 1067, de la Población Hernán Mosso, de la comuna de Santa Juana, desde donde se sacaron diversas especies”. A continuación agregó que “el testigo Jara Poblete se dirigió hasta el sector del cerro que se encuentra en la parte posterior de la vivienda, quien a unos cien metros de la casa de su padre, vio a esta persona con las cosas que se habían sacado, esto es botellas de pisco y de ron, además de bebidas energéticas, pero siendo más relevante la actitud en que vio a este individuo con la caja fuerte, la que también se había sacado de la vivienda de su progenitor, ya que la estaba abriendo con un martillo y un desatornillador”, añadiendo a continuación que “le dijo a este sujeto que parara y le entregara las cosas, pero en cambio huyó”, luego de lo cual precisaron los sentenciadores que el testigo señaló que “la persona que vio que tenía las cosas en el cerro, correspondía a un sujeto apodado “Pancho Malo”.

A continuación el fallo consignó que “el afectado Herman Alonso Jara Manríquez, explicó en la audiencia que al tener el dato de que a quien su hijo había visto con sus cosas, era aquel que se apodaba como “Pancho Malo”, lo llevó a recurrir a redes sociales como Facebook, en donde obtuvo la información que se trataba de Francisco Reyes Reyes; recibiendo después el llamado de una persona, a la que no quiso identificar, que le señaló que a quien buscaba se encontraba en un domicilio del pasaje San Gabriel, de la

Población Millaray, que correspondía a la casa de un sujeto al que le decían “El Laucha”, lugar al cual se dirigieron los testigos Herman Alonso Jara Manríquez y Maycol Camilo Jara Poblete”, luego de lo cual según consignó la sentencia impugnada “los funcionarios, Jacob Bravo Villa y Nicolás Eduardo Canales Concha, después de recibir un llamado radial como a las 11:50 horas, llegaron al inmueble ubicado del pasaje San Gabriel, encontrando en ese lugar al acusado, el que era en ese momento retenido por civiles”.

Dada la flagrancia en la comisión del delito de receptación, no fue necesaria la autorización previa por parte del Ministerio Público, de manera que no es posible sostener que la prueba obtenida lo haya sido con vulneración de garantías fundamentales.

**OCTAVO:** Que, en lo que se refiere al ingreso por civiles a un domicilio particular, lo cierto es que esta supuesta infracción incumbe ser invocada respecto del titular, residente u ocupante de dicho bien, de manera tal que no puede ser impetrada por personas que no detentan esta calidad, como acontece en la especie, de manera que tales reparos en modo alguno han vulnerado las garantías fundamentales del acusado.

**NOVENO:** Que, finalmente respecto de la supuesta vulneración a la integridad física sufrida por el acusado, quien en el contexto de su detención por particulares habría sido golpeado y atado, lo cierto es que ello en nada altera la validez del procedimiento y, en el evento de ser ella constitutiva de un delito, al acusado le asiste el derecho a perseguir la responsabilidad de quien resulte implicado en tal ilícito pero, tal como lo ha sostenido esta Corte de modo alguno se relaciona con la legitimidad del procedimiento dirigido en su contra por los hechos que motivaron su persecución por parte del Ministerio Público (SCS Rol N° 133839-20 de 9 de febrero de 2021 y N° 22181-21 de 10 de septiembre de 2021).

**DÉCIMO:** Que en razón de lo manifestado precedentemente y analizados los hechos a la luz de las disposiciones y formas legales atinentes a la materia, en el caso de marras no se han infringido los derechos que indica la defensa, pues fluye de manera inequívoca que la decisión no se sustenta en alguna prueba incriminatoria que encuentre su origen en diligencias o actuaciones declaradas nulas u obtenidas sin respetar garantías constitucionales, por lo que resulta inconcuso que las alegaciones de invalidación apoyadas en la causal principal aparecen carentes de fundamento, lo que conduce inequívocamente al rechazo del recurso por esta fracción inicial.

**UNDÉCIMO:** Que en lo tocante al motivo de nulidad subsidiario explicitado a través de la proposición de la causal de la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal en armonía con el artículo 342 letra c) del mismo cuerpo de leyes, cabe reiterar que ella se refiere a la omisión, en la sentencia, de alguno de los requisitos previstos en el artículo 342, indicando que ello ocurre en relación a los elementos que la letra c) de esta última disposición ordena observar, esto es: *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y la valoración de los medios de prueba que fundamentare dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”*. A su vez, esta última norma prescribe *“Valoración de la prueba. Los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiese desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el*



*señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados. Esta fundamentación deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”.*

En relación a esta causal la defensa reprocha que el veredicto impugnado carece de fundamentación, infringiéndose así, el principio lógico de la razón suficiente y específicamente el de corroboración, al tener por configurado el tipo penal de receptación con el sólo testimonio de Maycol Jara Poblete, aún contra la palabra de su representado.

Respecto de lo anterior, debe aclararse que la señalada omisión o ausencia no es tal, lo que se deduce de la sola lectura del fallo impugnado, de la que queda de manifiesto que la molestia real del recurrente está circunscrita a la valoración efectuada por el tribunal, la que no comparte. En efecto, lo anterior se aprecia del motivo sexto en donde el fallo reproduce los razonamientos que se tuvieron en consideración para llegar a las conclusiones que allí mismo se consigan. Así, se analizó -contrariamente a lo expresado por el recurrente-, que , “para corroborar las aseveraciones de Jara Poblete, está, en primer lugar, la propia declaración del acusado, quien admite no sólo que su apodo es “Pancho Malo”, sino que, además, acepta la ocurrencia del encuentro que tuvo con el referido testigo, pese a que trata de desligarse de las especies con las que fue visto, en particular de la caja fuerte -a la que se refirió como una “caja metálica”-, pretendiendo que se trató de un hallazgo casual”. A continuación y haciéndose cargo de los reproches de la defensa expuso que “resulta relevante clarificar que tal declaración se transforma en un medio de prueba, pudiendo analizarse su credibilidad, “y de la cual podrán extraerse conclusiones útiles para formar convicción”, siendo plenamente aplicable a este

efecto la regla general sobre libertad de prueba de los artículos 295 y 297 del Código Procesal Penal (DUCE, Mauricio y RIEGO, Cristian, *Proceso Penal*, Ed. Jurídica de Chile, primera edición, año 2007, p. 470)”, agregando enseguida que “concordaron los testigos Herman Alonso Jara Manríquez y Maycol Camilo Jara Poblete en cuanto a que se dirigieron al lugar que se les señalaba en que estaba el imputado, siendo esto último coincidente con lo dicho por este último, quien admitió que estaba en la casa en donde fue habido, y a la cual posteriormente arribó carabineros para proceder a llevarlo hasta la unidad policial, ya que, como lo señalaron los funcionarios, Jacob Bravo Villa y Nicolás Eduardo Canales Concha, después de recibir un llamado radial como a las 11:50 horas, llegaron al inmueble ubicado del pasaje San Gabriel, encontrando en ese lugar al acusado, el que era en ese momento retenido por civiles”.

**DUODÉCIMO:** Que, es necesario recordar que en un recurso como el de la especie, no ha sido dada a esta Corte la facultad de realizar una nueva ponderación de los elementos de prueba vertidos en el juicio oral, puesto que ello atenta contra el principio de inmediación y supera los límites de la nulidad. Por el contrario, la argumentación del impugnante se dirige en este sentido, por cuanto cuestiona la prueba producida por el ente persecutor, mediante el análisis de pasajes aislados, sin atacar -como supone la causal de nulidad en examen- el razonamiento del fallo que plasma el análisis global de la prueba rendida, en cuanto éste debe ajustarse a las reglas de la sana crítica, respetando las máximas de la experiencia, los principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados.

Por ello, la circunstancia de no compartir el recurrente las conclusiones del tribunal en cuanto a la fundamentación, es decir, la valoración de la prueba producida, no supone automáticamente su impugnación por esta vía, en donde se ha denunciado la falta o ausencia de análisis completo de la prueba rendida

y de los argumentos de la defensa, extremos que no concurren pues quedó demostrado que las pruebas y cuestionamientos formulados en torno a ella fueron efectivamente considerados y valorados, sin contradecir aquellos parámetros.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, sobre la motivación de una sentencia, como lo ha señalado esta Corte Suprema, se ha resaltado la importancia que todo fallo cumpla con los fundamentos de claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos (Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo XXV, Sección 1ª., pág. 156, año 1928). En esto ha resuelto la jurisprudencia nacional que hay ausencia de fundamento tanto cuando este se encuentra ausente, como cuando la ausencia es parcial o son insuficientes los expresados, al igual que en el evento de existir incoherencia interna, arbitrariedad y falta de razonabilidad; y que la motivación de las sentencias constituye una faceta o cariz de un justo y racional procedimiento como exige nuestra carta fundamental, que debe cumplirse, por ser esta la ocasión en que el Estado, por medio del órgano jurisdiccional, responde al derecho de petición y especialmente a la acción intentada en el proceso, lo cual, sin duda, debe tener en consideración el tribunal superior al revisar eventualmente la decisión (SCS Rol N° 8314-09 de 27 de enero de 2011; Rol N° 8167-08 de 21 de diciembre de 2010 y Rol N° 3696-08 de 21 de diciembre de 2010).

**DÉCIMO CUARTO:** Que en el caso en estudio, conforme a los razonamientos que preceden, puede advertirse que la sentencia recurrida no omitió los requisitos previstos en el artículo 342, letra c), que exige como contenido de ella, la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que



fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del cuerpo legal mencionado, lo que permite la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegó el veredicto e impide configurar que el vicio denunciado, como constitutivo de invalidación absoluta, que contempla el artículo 374 e) del Código Procesal Penal.

**DÉCIMO QUINTO:** Que la prueba rendida en la audiencia no tiene mérito suficiente para justificar los quebrantamientos esgrimidos, toda vez que de ella no aparece que se hayan efectuado diligencias o actuaciones nulas o bien obtenidas sin respetar determinadas garantías constitucionales, sino más bien ratifica la existencia de prueba incriminatoria contra el imputado que sirvió de sustento a la convicción del tribunal.

**DÉCIMO SEXTO:** Que en consecuencia y de todo lo analizado se concluye que los Jueces del Tribunal Oral al dictar la sentencia impugnada han cumplido a cabalidad con las normas legales que rigen la materia, sin que se advierta en ello algún vicio de los que invoca el recurrente, por lo que se desestimaré el recurso por las dos causales esgrimidas.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra a) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Francisco Andrés Reyes Reyes, en contra la sentencia de veintiuno de abril del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción y contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC 1910053180-4, RIT 22-2021, los que, en consecuencia, **no son nulos**.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Brito y Llanos, quienes estuvieron por acoger el recurso por la primera causal invocada, esto es, la del Art. 373 letra a) del Código Procesal Penal, por las razones que a continuación se dirán:

1º) Que según aparece de las declaraciones de los policías aprehensores consignadas en el fallo de instancia, estos procedieron a la detención del imputado *“... después de recibir un llamado radial como a las 11:50 horas, llegaron al inmueble ubicado del pasaje San Gabriel, encontrando en ese lugar al acusado, el que era en ese momento retenido por civiles”*; por otro lado, también se asienta en la sentencia recurrida que el delito materia del proceso acaeció *“el día 24 de octubre de 2019, siendo aproximadamente entre las 8:30 y las 10:30 horas de la mañana”*;

2º) Que de acuerdo a lo anterior, es un hecho inconcuso que el acusado no se encontraba, al ser detenido, en la casa habitación de la víctima del delito, sino en un inmueble de un tercero (apodado “El Laucha”), y que al llegar a ese lugar los policías, más de una hora después de perpetrado el delito, constataron que el presunto hechor ya se encontraba detenido (“retenido”) por particulares, quienes lo sindicaban como autor del robo;

3º) Que la detención practicada por dichos terceros resultaba ilegal, toda vez que si bien el Art. 129 del Código Procesal Penal autoriza a cualquier persona para detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima, tal situación de flagrancia no concurría en la especie;

4º) Que, en efecto, el Art. 130 del citado código define el delito flagrante en los siguientes términos:

*“Artículo 130: Situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia:*

*a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito;*

*b) El que acabare de cometerlo;*

*c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice;*

*d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo, y*

*e) El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se hubiere cometido en un tiempo inmediato.*

*f) El que aparezca en un registro audiovisual cometiendo un crimen o simple delito al cual la policía tenga acceso en un tiempo inmediato.*

*Para los efectos de lo establecido en las letras d), e) y f) se entenderá por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren transcurrido más de doce horas.”;*

**5°)** Que en el presente caso, al ser detenido el acusado por terceros (antes de su entrega a la policía), no se encontraba en ninguna de las tres primeras situaciones a que se refiere la disposición citada, como quiera que en ese momento no estaba cometiendo el delito, ni acababa de cometerlo, ni se encontraba huyendo después de su comisión (ya que, como se señaló, estaba en el domicilio de un tercero); hipótesis a las que no se aplica el plazo extendido a que se refiere el inciso final del Art. 130 del Código Procesal Penal, como más adelante se dirá;

**6°)** Que habiéndose procedido a la detención del encausado por particulares, ello resultaba improcedente, puesto que no concurría el requisito



de inmediatez o inmediación en relación con el hecho punible, no siendo una situación de flagrancia en sentido estricto.

Respecto a su posterior detención por la policía (que tampoco se ejecutó en condiciones de inmediación, ya que había transcurrido más de una hora después de perpetrado el hecho), para que ella fuera procedente debía concurrir alguno de los casos a que se refieren las letras d), e) o f) del aludido precepto, y dentro del plazo a que se refiere su inciso final, esto es, hasta 12 horas después de la comisión del hecho (sin perjuicio de que la policía puede también detener en las tres primeras hipótesis de la norma en comento); casos que en doctrina se denominan como “flagrancia ficta”. Dicho plazo de 12 horas no es aplicable, en cambio, a la detención que pueden realizar los particulares o civiles, quienes solo pueden hacerlo en alguna de las situaciones que prevén los tres casos referidos en el considerando anterior (letras a), b) y c) del aludido Art. 130), que corresponden a la flagrancia propiamente dicha. Al respecto, se ha dicho: *“la definición legal de “tiempo inmediato” sólo ha sido establecida para las hipótesis de flagrancia delictiva ficta de las letras d) e) y f) del artículo 130 CPP, sin que resulte procedente su extensión más allá de dicho ámbito de aplicación.”* (Guillermo Oliver Calderón, “Facultades autónomas de la policía en el sistema procesal penal chileno”. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso no.51 Valparaíso dic. 2018. [https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S071868512018000200035](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071868512018000200035)).

Debe tenerse presente, asimismo, que las normas sobre detención en caso de flagrancia, sin orden judicial previa, constituyen una excepción, y como tal, deben interpretarse restrictivamente, como dispone el inciso segundo del Art. 5° del Código Procesal del Ramo;

7º) Que así las cosas, la detención devino en ilegal y afectó sustancialmente el derecho constitucional del recurrente a su libertad ambulatoria, consagrado en el Art. 19 N° 7 de la Carta Fundamental; por lo que las diligencias investigativas derivadas de dicha detención y los elementos de convicción recopilados en la misma adolecen de ilicitud, no pudiendo haberse invocado en contra del imputado en el juicio oral seguido en su contra, afectando de esta forma, de igual modo, y también en forma sustancial, su derecho a ser juzgado en un debido proceso, consagrada en el numeral 3º inciso quinto del Art. 19 de la misma Carta política, así como en los Arts. 7.1, 2 y 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos;

8º) Que en virtud de tales razonamientos, los disidentes fueron del parecer –como se adelantó- de estimar el recurso interpuesto por la causal antes expresada, y anular el juicio oral y la sentencia en él recaída, debiendo procederse a un nuevo juicio oral ante el tribunal no inhabilitado que corresponda.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo del Ministro Sr. Llanos.

Rol N° 31099-2021

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., y los Ministros Suplentes Sres. Rodrigo Biel M., y Miguel Vázquez P. No firman los Ministros Suplentes Sres. Biel y Vázquez, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido ambos su período de suplencia.





En Santiago, a tres de marzo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

